

AGENDA CIUDADANA

ORGULLO SIN NOSTALGIA Y CON INCONFORMIDAD

Lorenzo Meyer

El Nacionalismo. Es notable el orgullo inglés por su historia y su aceptable nostalgia por su época imperial y de liderazgo mundial. La situación presente de Inglaterra como país no es la ideal pero sí es bastante satisfactoria. La aceptación de su pasado permite a los británicos llevar con dignidad un presente donde son importantes pero ya no centrales. En contraste, en México pareciera empezar a dominar una cierta pérdida del orgullo colectivo por ciertos pasajes y procesos históricos --en particular los nacionalistas— y un tipo de resignación con un presente mediocre e insatisfactorio.

Como ciudadanos de una nación pobre y muy injusta, los mexicanos no deberíamos sentirnos complacidos con parte de nuestro pasado pero menos con el presente, pero a la vez no debemos ser desdeñosos con algunas de las luchas históricas, especialmente con el reiterado y a veces frustrante esfuerzo por definirnos como entidad nacional frente al enorme y poderoso vecino del norte. No tenemos derecho a marginar nuestra historia ni a transformarla en un pasado confortable – nostálgico— sino que debemos vivirla como una tarea inacabada y usarla como acicate para definir un mejor proyecto de futuro.

La añoranza o lo opuesto, el desdén, por el nacionalismo pasado, lo mismo que la resignación o conformidad frente al estado de cosas actual –donde la integración sin objetivos claros a Estados Unidos--, son lujos que simplemente no debiéramos darnos en las circunstancias creadas por la globalización, por el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte (TLCAN) y por nuestra posición en el sistema internacional como país aún lejos de la verdadera modernidad. Frente a esa situación, es necesario, por un

lado, mantener y nutrir el orgullo colectivo con la fidelidad a los momentos brillantes del pasado histórico, y por otro, desarrollar un proyecto de futuro compatible con la complicada globalidad.

La Desconfianza como Herencia.- Una de las características de la historia mexicana en materia de política externa, quizá la central, se puede resumir con una sola expresión: desconfianza. Hay razones para ver al mundo más allá de nuestras fronteras como fuente de peligros más que de oportunidades; como un conjunto de adversarios y no como uno de asociados en un proyecto de beneficio común.

La sangre que a inicios del siglo XIX atrajo a los tiburones del mar internacional al cuerpo político mexicano recién nacido a la vida independiente, fue la incapacidad -- ¿imposibilidad?-- de la nueva clase política mexicana de mantener la unidad interna de la nueva nación. El regionalismo exacerbado cubierto con el manto del federalismo, dejó pocos recursos en manos de un ejecutivo que, por otra parte, resultó particularmente inestable. En el México inicial, el sistema presidencial simplemente no funcionó y fue necesario llegar hasta la restauración de la República en 1867 para poder iniciar la construcción de un poder central efectivo. La enconada lucha intestina y la bancarrota fiscal, aunadas a la debilidad de las instituciones, a la baja densidad demográfica, a las profundas divisiones sociales, a la pobreza generalizada y a la diversidad cultural, propiciaron derrotas militares, pérdidas territoriales y, temporalmente, pérdidas de la soberanía.

Al declarar México su independencia, Inglaterra, el gran árbitro del equilibrio internacional del poder, condicionó su reconocimiento a la firma de un tratado de comercio donde las partes aparecían como iguales pese a su terrible desigualdad --en el libre comercio siempre una de las partes ha sido más “libre” que la otra— e hizo unos

préstamos en condiciones leoninas que, al poco tiempo –1827-- México se vio imposibilitado de pagar. España, por su parte, se negó a reconocer la independencia mexicana y por tres lustros, Madrid mantuvo viva su amenaza de reconquista, aunque finalmente falló en su único intento (la expedición del brigadier Isidro Barradas de 1829). Pese a que México declaró a la católica religión oficial, el Vaticano, en apoyo a España, condenó la independencia y por un buen tiempo se negó a nombrar obispos en tierras mexicanas. Francia no vaciló en usar a su armada en 1838 para castigar a México por la falta de reparación de daños a sus súbditos durante disturbios imposibles de prevenir. Finalmente, Estados Unidos, el país que había sido inspiración para independentistas y republicanos mexicanos, desde el inicio pidió cesiones territoriales, apoyó la rebelión texana y más tarde inició una guerra para hacerse ya no sólo de Texas sino de todo el norte.

Por medio siglo los líderes mexicanos fueron incapaces de presentar un frente unido ante el difícil entorno exterior en que México tenía que consolidarse como nación. Cada una de las grandes facciones políticas –liberales y conservadores— trató de usar al exterior para allegarse recursos y destruir al oponente. Así, en 1859 los conservadores aceptaron indemnizar a los españoles por daños sufridos durante las guerras civiles (tratado Mont-Almonte) pero los liberales fueron más lejos y cedieron derechos territoriales a perpetuidad a los norteamericanos (tratado McLane-Ocampo). El éxito militar de los liberales llevó a los enemigos a apoyar la presencia de una fuerza expedicionaria francesa para dar forma a un régimen monárquico (1862 - 1867). El triunfo liberal sobre el proyecto francés resultó la cresta de la primera gran ola nacionalista mexicana.

La Segunda Ola.- Con la consolidación política interna, primero bajo la presidencia de Benito Juárez y después de Porfirio Díaz, la clase gobernante mexicana dejó de ver al mundo externo como una amenaza y se abrió al capital foráneo como un medio para desarrollar al país.

La Revolución Mexicana de 1910 acabó abruptamente con la corta etapa de cooperación y entendimiento entre la clase dirigente mexicana y el exterior. En defensa de su autonomía, los dirigentes revolucionarios chocaron una y otra vez con las grandes potencias, en particular con Estados Unidos. De ese choque surgió una doctrina de política exterior que habría de durar casi todo el resto del siglo XX: igualdad jurídica de los estados, no intervención de un estado en los asuntos internos de otro, derecho de un país a darse el régimen que deseé, control nacional de los recursos naturales y de las actividades estratégicas, solución pacífica de las controversias internacionales, entre otros. Se trató de principios a los que se otorgó no sólo valor jurídico sino ético, y cuyos momentos culminantes fueron el rechazo de Venustiano Carranza a las demandas norteamericanas para resolver el curso de la guerra civil, la aprobación de la Constitución de 1917, el rechazo de Plutarco Elías Calles a los Acuerdos de Bucareli, la reforma agraria y la expropiación petrolera.

Tras el apoyo político, económico, laboral e incluso militar, de México a Estados Unidos durante la II Guerra Mundial, la clase gobernante postrevolucionaria, apoyándose en la legitimidad del nacionalismo de la etapa anterior, diseñó una política económica de intervención estatal y protección a la inversión nacional que, combinada con una estabilidad política autoritaria, la aceptación condicionada de la inversión externa y un discreto pero efectivo anticomunismo, permitió al país crecer y mantener una independencia relativa en el mundo bipolar de la guerra fría.

Las Crisis.- La crisis económica de 1982 sacó a la superficie las limitaciones del régimen postrevolucionario. Fue entonces cuando la élite política, para sostener lo central, lo que consideraba imprescindible –su monopolio del poder— decidió modificar sustancialmente tanto el modelo económico como su relación con el mundo exterior: privatizó el sector estatal, acabó con la protección arancelaria, dio prioridad al mercado externo, liberalizó el trato al gran capital transnacional y confió que sus recursos y tecnología llevaran adelante un desarrollo que ya era imposible con el tipo de economía creada a partir de la II Guerra Mundial.

Para poner en marcha e implantar el nuevo modelo económico neoliberal y lograr el apoyo de Estados Unidos para hacer frente a las tensiones internas que acarreó un cambio tan drástico, el grupo tecnocrático encabezado por Carlos Salinas de Gortari decidió dismantelar el nacionalismo heredado de la Revolución Mexicana. Fue así que México se adelantó al resto de América Latina, y apoyado en el factor geográfico, negoció en un tiempo muy breve --y a costa de muchos intereses sin fuerza política, como los campesinos— un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. El supuesto implícito del TLCAN fue la redefinición del objetivo nacional mexicano de largo plazo y que, con diferentes énfasis desde luego, habían aceptado tanto la izquierda gubernamental (Lázaro Cárdenas) como la derecha (Miguel Alemán): la construcción y mantenimiento de una relativa independencia política, económica, ideológica y cultural frente a Estados Unidos. A partir de 1994, y sin articular un discurso que lo legitimara, lo describiera y lo ligara al pasado histórico, el interés nacional dio un giro de 180° y se propuso integrar la débil estructura productiva mexicana al gran mercado norteamericano.

El TLCAN ya ha echado raíces, pero el proyecto original de la clase política que lo negoció, fracasó. La apertura de la economía no condujo a la recuperación del crecimiento acelerado y si, en cambio, a que las enormes tensiones desatadas terminaran por minar las ya muy carcomidas bases políticas del partido de Estado (PRI) y se diera el cambio de régimen en las elecciones del 2000.

La Posibilidad de un Nacionalismo de Tercera Ola.- Tras el fracaso soviético y la transformación del sistema internacional en unipolar y ferozmente capitalista, no le quedó a países como México otro camino que el de la apertura al mercado internacional. Sin embargo, dentro del marco de la globalización quizá haya opciones, grados de libertad.

Un nuevo nacionalismo mexicano es posible si se empieza por hacer una reivindicación de su propia historia. Luego, de cara al futuro, hay que montar una sistemática defensa del mercado interno como vía paralela a la integración con el mundial. Igualmente hay que defender el control nacional de los sectores estratégicos, de la agricultura –tal y como lo hacen Estados Unidos, Japón o Francia, para poner ejemplos conspicuos— de tal forma que no sólo se beneficien, como es hoy el caso, los grupos e intereses más fuertes a costa de los que simplemente nunca tuvieron la capacidad política de defenderse durante la negociación del TLCAN y cuya marginación ha aumentado desde entonces. Para que México mantenga su sentido como unidad nacional, debe de lograrse un grado de solidaridad interna mayor de la que tienen sus partes con el exterior.

En teoría, el libre intercambio debe abarcar bienes, capitales y mano de obra. En el TLCAN la mano de obra mexicana no está legalmente integrada a la transnacionalización económica aunque de hecho lo está por la perversa vía de

migración indocumentada a Estados Unidos. Por tanto, el nuevo proyecto debe de buscar que el concepto de apertura frente a Estados Unidos y Canadá incluya a todos los factores de la producción, es decir, también a los trabajadores.

La identidad nacional de un México tan abierto a la única superpotencia -- Estados Unidos-- demanda al interior la construcción de un arreglo político, jurídico y social que sea legítimo y fuente real de satisfacción colectiva. Para eso no hay alternativa a una voluntad efectiva por disminuir la desigualdad, la pobreza y construir por primera vez un Estado de Derecho. El respeto por la ley y las instituciones es insustituible para hacer realidad el sentimiento de dignidad del ciudadano. Finalmente, los canadienses han mostrado que dentro del TLCAN se puede y debe construir una política de defensa de la identidad cultural y de su pluralidad. En suma, en el siglo XXI hay posibilidad y necesidad de una tercera ola nacionalista en México, de un nacionalismo para la globalidad.